

Reitera medidas como retrasar la edad de jubilación y fomentar los sistemas de capitalización

CCOO critica la insistencia del FMI en las mismas recetas como solución a los retos de la economía

CCOO comparte con el Fondo Monetario Internacional en la necesidad de mejorar las tasas de ahorro público y privado de las economías, ya que las mismas sirven para mejorar la financiación pública y la economía productiva, promoviendo el empleo de calidad y el sostenimiento de los Estados de Bienestar. Sin embargo, a juicio de este sindicato, el FMI equivoca las propuestas concretas con las que hacer posible este objetivo, así como el equilibrio que debe presidir cualquier política económica sobre la función social del sistema de pensiones, como garante último de prestaciones que deben ser suficientes y adecuadas.

16 de enero de 2019

Se trata de un informe de recomendaciones generales que no abordan la distintas situaciones en cada país, por lo que llama a la atención que incorpore recomendaciones de aplicación general en materia de edad de jubilación para la población más joven (menos de 28 años) y de comportamiento de cotización/aportaciones a sistemas de pensiones.

La vieja receta de siempre: las pensiones como instrumento de ajuste macro-económico

El FMI vuelve a plantear una transferencia a la responsabilidad individual, así como de los riesgos asociados, de trabajadores y ciudadanos para lograr una financiación suficiente de la economía, de modo que la misma se genere exclusivamente a su cargo. Se plantea así que sea el sistema de pensiones la principal fuente de financiación de la tasa de ahorro por una doble vía. De un lado, retrasando la edad media efectiva de acceso a la jubilación para los trabajadores más jóvenes, de los actuales 63 años hasta los 68 años. Y, de otro, estableciendo una aportación de 6 puntos del salario a instrumentos de previsión social complementaria, que vengán a cubrir el deterioro que sufrirían las pensiones públicas en este esquema.

El FMI supedita así el objetivo del sistema de pensiones a que sirva a la financiación de la economía, en lugar de que sirvan para garantizar una renta suficiente y adecuada para los trabajadores y trabajadoras en su edad de retiro profesional.

Lo hace, además, reconociendo que las bajas expectativas de rentabilidad en los distintos tipos de activos, se suman a los problemas de equidad y de incapacidad para generalizar y universalizar sistemas de protección social basados en instrumentos de capitalización individual financiados con aportaciones definidas de las personas.

El derecho a la jubilación anticipada se presenta en el discurso del FMI como un obstáculo insalvable para el objetivo de la contención del gasto público. Pero en realidad existen diferentes herramientas que, como en el caso de España, permiten mantener el derecho a la jubilación anticipada haciéndolo compatible con el equilibrio del gasto. En nuestro caso, mediante un sistema que exige amplias carreras de cotización a quienes se jubilan antes de su edad ordinaria y la asunción de coeficientes reductores en la cuantía que garantizan, en exceso en muchos casos, la neutralidad financiera para el sistema de estas jubilaciones anticipadas. En otros países de nuestro entorno han sabido encontrar fórmulas similares para garantizar el mismo equilibrio, sin tener que recurrir necesariamente a la supresión del derecho a la jubilación anticipada.

Las recetas del FMI ahondan en la brecha generacional

Decirles a nuestros jóvenes que no van a poder acceder a un sistema de protección comparable al actual, o que para acceder a él, en condiciones similares a las hoy existentes, necesitan reducir en una quinta parte su periodo de percepción e incrementar simultáneamente en un 20% su esfuerzo de aportaciones durante su vida activa, no contribuye a afrontar una de las cuestiones centrales del debate social: evitar que se instale un sentimiento de conflicto entre generaciones en las que se preservan los derechos de unos a costa de los más jóvenes. No es la mejor forma de construir cohesión y consenso social ni de reforzar la aceptación y legitimación social de nuestros sistemas de protección social, de abordar estas cuestiones de este modo.

La necesidad de incluir en la ecuación otros elementos mucho más relevantes

A juicio de CCOO llama la atención que, lejos de lo que han comenzado a hacer ya otros organismos públicos, el FMI opte por la exclusión consciente y explícita de elementos tan relevantes para los objetivos macroeconómicos que persigue a la hora de mejorar la fuerza laboral y la capacidad productiva de los países como la emigración. O no dé un valor relevante a la política, el cambio tecnológico, la lucha contra la economía sumergida, la política educativa...

Y aún más criticable resulta el hecho de que este organismo internacional obvie deliberadamente el equilibrio que debe presidir cualquier política económica con respecto a la función social que cumple el sistema de pensiones, como garante último de prestaciones que obligatoriamente han de ser suficientes y adecuadas, junto con otras funciones de gasto social como la sanitaria y la de la atención a la dependencia que se orientan de forma prioritaria a garantizar el bienestar del colectivo de personas mayores y que, en un proceso de envejecimiento, también presentan necesidades crecientes.